

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, agosto diecinueve (19) de dos mil veinte (2020)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 312,

MAGISTRADA PONENTE: VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DIAZ

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-015-2019-00223-01.
EJECUTANTE:	CAROLINA OSPINA VERA <a href="mailto:notificacionescali@giraldoabogados.com.co">notificacionescali@giraldoabogados.com.co</a>
EJECUTADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
ASUNTO	NEGÓ MANDAMIENTO DE PAGO – REVOCA

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resolverá el recurso de apelación propuesto por la parte ejecutante, contra el auto interlocutorio nro. 570 del 16 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali, que se abstuvo de librar mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

La señora Carolina Ospina Vera, a través de apoderado judicial, presentó proceso ejecutivo contra el Municipio de Santiago de Cali, y solicitó librar mandamiento de pago en su favor, por el pago del capital correspondiente a la prima de servicios de los años 2008 a 2013, por los intereses DTF, por los intereses corrientes y moratorios y por las costas del proceso ordinario.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 570 del 16 de septiembre de 2019<sup>1</sup> el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali, negó el mandamiento de pago.

Consideró que, que en el presente asunto la acción ejecutiva es improcedente por estar el título viciado de ilegalidad, al respecto sostuvo que, si bien las sentencias ejecutoriadas son inmutables e inimpugnables, no es menos cierto que esa obligatoriedad no es absoluta, sino relativa, pues si se pide dar cumplimiento a un fallo que es absolutamente contrario a derecho, bien puede el juez abstenerse de hacerlo efectivo.

Así entonces, indicó que en un proceso ejecutivo que se adelantó en su despacho el cual no recrea una situación igual a la aquí planteada pero que puede ser aplicada por analogía, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, trajo a colación la sentencia T-546 de 2014 que precisó: “...la Sala considera que las interpretaciones de los jueces administrativos vulneran el derecho al debido proceso de la UGPP, porque desconoce la jurisprudencia de esta corporación señalada en el fallo

<sup>1</sup> Ver folios 50 a 53

*T-359 de 2009, en el cual la Corte estableció de manera clara que con anterioridad a la Ley 100 de 1993, los pensionados con pensión gracia que contribuyan con el 5% de su mesada pensional para la financiación de los servicios de salud, pasaron a cotizar el 12% sin importar el tipo de pensión de que se trate, concluyendo que sin excepción alguna, es obligatoria la cotización a salud sobre la mesada pensional en un porcentaje del 12% aporte que con posterioridad se destina a financiar el servicio médico asistencial del afiliado o pensionado”*

Por otro lado, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del 14 de marzo de 2019<sup>2</sup>, con base en la providencia antes citada precisó: “...Encuentra la Sala, que efectivamente existe un precedente jurisprudencial planteado por el máximo órgano constitucional en el que aborda los casos como el presente en sede de revisión de tutela, contra sentencia judicial proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, e indica que no es posible desconocer lo dispuesto para el efecto como quiera que el operador judicial no se encuentra obligado a cumplir con una sentencia que a todas luces es ilegal.

(...)

*Es menester señalar que corresponde al Juez administrativo no sólo velar por la efectiva garantía de los derechos deprecados por los sujetos que de una u otra manera los consideren vulnerados como consecuencia de un hecho, omisión y operación a cargo de la administración, sino también ser garante del tesoro público y determinar que el mismo sea intervenido de una forma justa y necesaria en la que no se conlleve al detrimento infundado a cargo del Estado”.*

Por lo anterior, en el caso concreto se abstuvo de librar mandamiento de pago, toda vez que, si bien en la sentencia ordinaria de segunda instancia se ordenó al Municipio de Cali a título de restablecimiento del derecho reconocer, liquidar y pagar a la ejecutante la prima de servicios, no puede desconocerse el hecho de que el Consejo de Estado mediante providencia del 14 de abril de 2016 unificó jurisprudencia respecto a la prima de servicios de docentes, negando la misma a los docentes nacionales vinculados antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

Consecuentemente, al ser para el fallador evidente que la ejecutante no tenía derecho a dicha prima considero que pese al principio de la cosa juzgada no era procedente desacatar la decisión del Consejo de Estado, cuando el título valor deviene de una errada interpretación de una norma que la torna ilegal y por ende consideró que no era obligatorio hacer cumplir una decisión que a todas luces era contraria a derecho.

#### **IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

Sostiene la apelante<sup>3</sup> en síntesis que, en el presente caso el título ejecutivo está constituido por una providencia judicial en firme, esto es una decisión de segunda instancia proferida en proceso ordinario por el Tribunal Administrativo del valle del Cauca, por lo tanto, considera que no existe duda de la existencia del título ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 297 del CPACA y que su competencia corresponde a la jurisdicción administrativa.

Ahora bien, pese a lo anterior sostiene que el a quo, se aparta de la orden del superior absteniéndose de librar mandamiento ejecutivo bajo el argumento de que el título ejecutivo “...estar el título viciado de ilegalidad...”, actividad que ejecuta de manera oficiosa y sin faculta para ello.

---

<sup>2</sup> Providencia del 14 de marzo de 2019, Mag Ponente: Oscar Alonso Valero Nisimblat, Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, proceso ejecutivo de Aura María Morales de Ramírez frente a la UGPP.

<sup>3</sup> Ver folios 55 a 59

Lo cual no es de recibido habida cuenta que de esta manera se vulneran principios propios de la administración de justicia como el acceso a la misma y el respeto por los derechos, al atomizarse una sentencia que reconoce derechos en favor de la ejecutante incursionando en tipos de otra área del derecho, imponiendo con sus propias razones transgresoras del principio a la seguridad jurídica, y los principios de juridicidad que deben imperar en el ejercicio jurisdiccional.

Así mismo, explico que para la edificación de la providencia que se impugna, se tuvo como fundamento aparte de una sentencia de tutela, la cual, analizó un asunto completamente diferente, lo cual impide que pueda ser tenida en cuenta como un eventual antecedente jurisprudencial, agregando a ello, que los efectos de una acción de tutela son inter-partes, además de no existir la mínima coincidencia entre lo analizado en el trámite constitucional y lo pedido en el presente asunto.

Finalmente, la casi obligatoriedad de acoger una sentencia de unificación de jurisprudencia, en el caso concreto resulta intemporal, pues, la providencia de segunda instancia que sirve de título ejecutivo proferida por esta Corporación dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoado por la demandante contra el Municipio de Santiago de Cali en la cual se le reconoció la prima de servicios como factor salarial, fue expedida en fecha posterior a la sentencia que unificó jurisprudencia frente a tal asunto.

## **V. CONSIDERACIONES:**

El asunto que se discute se contrae a establecer si el juez se encuentra facultado para negar el mandamiento de pago, bajo el argumento que la decisión judicial que se pretende ejecutar es ilegal por haber acaecido un cambio en el precedente jurisprudencial.

### **5.1. TESIS**

Teniendo en cuenta la finalidad del proceso ejecutivo, el juez debe limitarse a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para la procedencia del mandamiento de pago y, por lo tanto, no está facultado para efectuar un nuevo examen de legalidad de la providencia objeto de ejecución, en aras de garantizar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

### **5.2. RECuento NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL**

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA<sup>4</sup> establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de

---

<sup>4</sup> Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP<sup>5</sup> preceptúa que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que provenga del deudor o de su causante; **(ii)** una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial; **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez libraré mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

Por su parte, el artículo 430 del CGP dispone que *“los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso.”* En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución, según sea el caso.

El Consejo de Estado sostuvo que los títulos ejecutivos deben cumplir con ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales: i) Las formales, se refieren a las que den fe de que los documentos que lo conforman sean auténticos y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de una providencia judicial que preste mérito ejecutivo. ii) Las sustanciales, hacen alusión a que las obligaciones sean claras, expresas y exigibles. Igualmente ha señalado que un título ejecutivo puede ser singular, cuando está constituido en un solo documento, o complejo, cuando esté integrado por un conjunto de documentos.<sup>6</sup>

Dicha Corporación, también señaló que una obligación es clara, cuando no surge duda del contenido y características de la misma; expresa, cuando consigna taxativamente la existencia del compromiso, y exigible, cuando para pedir el cumplimiento no es necesario agotar plazos o condiciones, o los mismos ya se han agotado<sup>7</sup>.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

<sup>5</sup> Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 31 de enero de 2008, Consejera Ponente Dra. MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, Radicación No. 44401-23-31-000-2007-00067-01 (34201).

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 14 de mayo de 2014, Consejero Ponente Dr. ENRIQUE GIL BOTERO, radicación número 25000-23-26-000-1999-02657-02 (33.586).

Adicionalmente, la misma colegiatura expuso que la finalidad del proceso ejecutivo es garantizar el ejercicio libre y eficaz de los derechos respecto de los cuales no hay duda de que le pertenecen a una persona; es una herramienta que brinda el ordenamiento jurídico para hacer efectivo el derecho material o sustancial del que se es titular. En consecuencia, su propósito no es procurar el reconocimiento del derecho o interés protegido, el cual ha debido ventilarse en el proceso correspondiente, sino su satisfacción a través de la vía coactiva.

En este punto, resulta pertinente traer a colación el siguiente extracto jurisprudencial:

*“En primer lugar, la Sala advierte que el proceso ejecutivo es un instituto jurídico procesal idóneo para garantizar el ejercicio libre y eficaz de los derechos respecto de los cuales no hay duda que le pertenecen a una persona, incluso mediante el uso de la facultad coercitiva de la rama jurisdiccional del poder público.*

*En otras palabras, el proceso ejecutivo es una herramienta por medio de la cual el ordenamiento jurídico le brinda a los asociados la posibilidad de hacer efectivo el derecho material o sustancial<sup>8</sup> del que son titulares, como una manifestación del compromiso del Estado colombiano en la consecución de sus fines esenciales<sup>9</sup>.*

*La Corte Constitucional, mediante sentencia C-454 de 12 de junio de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra), se pronunció acerca de la finalidad del proceso ejecutivo, en los siguientes términos:*

*“4.1. El proceso ejecutivo en general tiene por finalidad **obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado**; se trata, como lo han definido los doctrinantes de **una pretensión cierta pero insatisfecha**, que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total de la obligación”. [Resalta la Sala].*

*Posteriormente, la misma Corporación, mediante sentencia C-573 de 15 de julio de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), resaltó que:*

*“4.2. La existencia de esta clase de procesos tiene como soporte la **garantía de la propiedad privada y de los demás derechos adquiridos conforme a las leyes civiles**, y su finalidad consiste en **satisfacer los derechos cuando los obligados no cumplen libremente con sus obligaciones**. La ejecución pretende, entonces, la **satisfacción del crédito reclamado por el ejecutante**, es decir, **hacer efectivo el derecho del acreedor frente al deudor**, quien de manera libre ha contraído una obligación con aquél”. [Resalta la Sala].*

*Finalmente, en sentencia T-080 de 29 de enero de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), la Corte señaló:*

*“[...]. De acuerdo con lo anterior, la finalidad del proceso ejecutivo es la de **procurar al titular del derecho subjetivo o del interés protegido**, no el reconocimiento de este derecho o interés, el cual ha debido ventilar en el proceso correspondiente, sino **su satisfacción a través de la vía coactiva**”. [Resalta la Sala]<sup>10</sup>.*

<sup>8</sup> Constitución Política de Colombia. “ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. [Resalta la Sala].

<sup>9</sup> Ibid., “ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. [Resalta la Sala].

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 12 de julio de 2018, Consejera Ponente Dra. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, radicación número 81-001-23-33-003-2017-00042-01.

En suma, la finalidad del proceso ejecutivo no es declarar un derecho dudoso, sino hacer efectivo el que ya está reconocido en una prueba pre constituida<sup>11</sup>, y es por tal razón que el análisis de procedencia del mandamiento de pago se ha de limitar a verificar si las obligaciones son claras expresas y exigibles.

### 5.3. CASO CONCRETO:

De conformidad con el artículo 328 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

El Juez de primera instancia, mediante el auto recurrido, dispuso negar el mandamiento de pago, por considerar que el título ejecutivo es ilegal, en la medida que el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación, dispuso que los docentes no tienen derecho a la prima de servicios que le fue reconocida a la demandante a través de la providencia objeto de ejecución.

Por su parte, el apoderado de la demandante, en suma, señaló en el recurso de apelación impetrado que en este proceso no hay lugar a analizar un asunto ya resuelto, pues de tal modo se estaría vulnerando el principio a la seguridad jurídica, al efectuar nuevamente la revisión de una decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada.

Para esta Corporación resultan de recibo los argumentos expuestos por la parte apelante, como quiera que la finalidad del proceso ejecutivo no es efectuar el análisis sobre la procedencia del reconocimiento del derecho o interés protegido, el cual debió ventilarse en el proceso correspondiente.

Así entonces, tal como lo señaló el apoderado de la parte ejecutante, efectuar un nuevo análisis de la sentencia objeto de ejecución dentro del proceso ejecutivo resulta una conducta palmariamente transgresora de los principios de cosa juzgada<sup>12</sup> y de la seguridad jurídica<sup>13</sup>, en la medida que se abriría la puerta para que en el referido trámite se genere una nueva discusión respecto a una decisión ejecutoriada.

De igual forma, debe indicarse que respecto a los argumentos expuestos por el a quo en relación con la aplicación de una decisión emitida por esta Corporación<sup>14</sup>, la misma no guarda relación jurídica con el presente caso, puesto que el fundamento principal en dicha providencia para negar el mandamiento de pago fue el análisis efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia T-546 de 2014 donde se resolvió:

*“...la Sala considera que las interpretaciones de los jueces administrativos vulneran el derecho al debido proceso de la UGPP, **porque desconoce la jurisprudencia de esta Corporación señalada en el fallo T – 359 de 2009**, en el cual la Corte estableció de manera clara que con anterioridad a la Ley 100 de 1993, los pensionados con pensión gracia que contribuían con el 5% de su mesada pensional para la financiación de los servicios de salud,*

<sup>11</sup> Procesos Ejecutivos, Declarativos y Cautelares, Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal N° 2., MARCO GERARDO MONROY CABRA, Pag. 50, 1984.

<sup>12</sup> “La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica” (Corte Constitucional, C-100 de 2019).

<sup>13</sup> “La Corte Constitucional (SU 072 de 2018) ha explicado que la seguridad jurídica implica que “en la interpretación y aplicación del derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite”.

<sup>14</sup> Providencia del 14 de marzo de 2019, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Magistrado Ponente Dr. Oscar Valero Nisimblat, proceso ejecutivo de Aura María de Ramírez frente a la UGPP.

*pasaron a cotizar el 12%, sin importar el tipo de pensión de que se trate, concluyendo que sin excepción alguna, es obligatoria la cotización a salud sobre la mesada pensional en un porcentaje del 12%, aporte que con posterioridad se destina a financiar el servicio médico asistencial del afiliado o pensionado, **incurriendo sus providencias en un defecto sustantivo que da lugar a que en el presente caso proceda la acción de tutela...**" (Negrilla y Subraya fuera de texto).*

Situación que en nada se compara con el caso en estudio, pues es evidente que la providencia que se pretende ejecutar no puede ser declarada ilegal por el simple hecho de haberse emitido una sentencia de unificación<sup>15</sup>, que por demás fue proferida con posterioridad al fallo de segunda instancia que reconoció el derecho a la actora.

En este punto, es pertinente recordar que frente al reconocimiento y pago de la prima de servicios a favor de los docentes, durante un tiempo considerable hubo disparidad de criterios y que fue a raíz de dicha discrepancia que el Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación del 14 de abril de 2016<sup>16</sup>; providencia en la que se llevó a cabo el análisis de los argumentos que sustentaban las dos posturas y utilizó varias reglas y métodos de interpretación, de acuerdo a la Constitución, para concluir que la Ley 91 de 1989 no crea ni reconoce a favor de los docentes oficiales la prima de servicios contemplada en el Decreto Ley 1042 de 1978, y que sólo a partir del año 2014, dichos servidores adquirieron el aludido derecho, por cuanto así lo dispuso el Decreto 1545 de 2013.

No obstante, la sentencia objeto de ejecución como ya se indicó fue proferida con anterioridad a que el Consejo de Estado unificara el criterio frente al reconocimiento de la prima de servicios a favor de los docentes. Luego, incluso, siendo permitido efectuar un análisis de legalidad del título ejecutivo, más allá de la verificación de que este sea claro, expreso y exigible, resultaría extremadamente gravoso negar el mandamiento de pago pretendido en el presente caso, bajo el argumento consistente en que éste es ilegal dando aplicación a un precedente jurisprudencial emitido con posterioridad a la ejecutoria de la providencia cuyo cumplimiento se pretende.

En consecuencia, tenemos, que el título a ejecutar se encuentra contenido en la sentencia del 12 de noviembre de 2013<sup>17</sup> proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Cali, que negó las pretensiones de la demanda, y la sentencia de fecha 25 de agosto de 2015<sup>18</sup> proferida por esta Corporación, a través de la cual se revocó la sentencia de primera instancia y se ordenó al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI reconocer y pagar la prima de servicios a favor de la demandante, en su calidad de docente.

Por tanto, al efectuar el estudio de procedencia del mandamiento de pago, ha de limitarse a verificar si el título ejecutivo contenido en la aludida providencia es claro, expreso y exigible, más no efectuar un nuevo estudio de legalidad del fallo.

Así las cosas, la Sala dispondrá revocar la decisión de negar el mandamiento de pago tomada por el *a quo*, para que, en su lugar, este proceda a realizar el estudio pertinente respecto al cumplimiento de los requisitos de procedencia del mandamiento de pago.

<sup>15</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ. Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 15001-33-33-010-2013-00134-01(3828-14)CE-SUJ2-001-16. Actor: NUBIA YOMAR PLAZAS GOMEZ. Demandado: MINISTERIO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE BOYACA. Referencia: SENTENCIA DE UNIFICACION JURISPRUDENCIAL CE-SUJ2 No. 001/16 PROFERIDA EN APLICACION DEL ARTICULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011. PRIMA DE SERVICIOS DE DOCENTES OFICIALES.

<sup>16</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 14 de abril de 2016, Consejera Ponente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, radicación nro. CE-SUJ215001333301020130013401.

<sup>17</sup> Folios 7 a 24

<sup>18</sup> Ver folios 25 a 36

En consecuencia, se;

**RESUELVE:**

**PRIMERO.: REVOCAR** el auto interlocutorio nro. 570 del 16 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali, que dispuso negar el mandamiento de pago solicitado por la demandante CAROLINA OSPINA VERA contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

**SEGUNDO: DEVUÉLVASE** al Juzgado de Origen para que proceda a efectuar el análisis de procedencia del mandamiento de pago pertinente, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ**  
Magistrado

  
**ZORANNY CASTILLO OTÁLORA**  
Magistrada

  
**ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**  
Magistrada